

MEMORIA Y REPARACIÓN: EL CAMINO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL PARA LAS VÍCTIMAS*

Gloria Zambrano Ramón

Introducción

La memoria, la reparación y el derecho a la verdad son elementos esenciales para el desarrollo de la justicia transicional. Esta contribución académica busca plantear la importancia de la memoria en la historia del conflicto armado colombiano, como elemento que garantiza a las víctimas una reparación integral dentro de la justicia transicional. La memoria, la verdad y la reparación no pueden desligarse, pues, a la luz de los *derechos humanos*, son el mejor camino para la construcción del respeto y las garantías judiciales, y para llegar a descifrar la dinámica histórica del conflicto armado. Esta visión de la memoria para esclarecer la verdad permitirá comprender por qué la narración histórica de los hechos sucedidos son necesarios para una reparación integral.

Este artículo, en su parte introductoria, abordará el concepto de justicia transicional desde una perspectiva del derecho interno y del derecho internacional de los derechos humanos. En la segunda parte se abordarán la memoria, la reparación y la verdad, para luego dar paso a las consideraciones finales.

* Este capítulo es resultado del proyecto de investigación "La convencionalización del derecho: el caso del ordenamiento jurídico colombiano desde la justicia multinivel y el posconflicto", que hace parte de la línea de investigación Fundamentos e implementación de los Derechos Humanos, del grupo de investigación Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia; en conjunto con el proyecto "Análisis de la justicia transicional en el marco jurídico colombiano", de la Universidad Católica de Colombia y la investigadora visitante de la Universidad de Barcelona.

Precisiones conceptuales

El vocablo *justicia transicional* hace referencia a los procesos por medio de los cuales se efectúan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, o bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz.

La justicia transicional también es entendida como el:

[...] conjunto de teorías y prácticas derivadas de los procesos políticos por medio de los cuales las sociedades tratan de ajustar cuentas con un pasado de atrocidad e impunidad y hacen justicia a las víctimas de dictaduras, guerras civiles y otras crisis de amplio espectro o larga duración con el propósito de avanzar o retornar a la normalidad democrática.²⁴¹

En este marco, la noción de justicia transicional o justicia de transición se refiere a la necesidad de pasar del autoritarismo a la democracia o de la guerra a la paz, y que esto se realice por medio de un proceso de reconciliación justa y duradera: justa, porque se entiende que no existe tal reconciliación si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia para todos; duradera, porque la construcción de la democracia o de un país tras un conflicto armado debe pasar en algún momento por solucionar el conflicto subyacente para evitar que vuelva a producirse. En este contexto, hay que entender que el proceso de reconciliación no puede ser una excusa para la impunidad, ni una alternativa a la verdad o a la justicia, ni un pretexto para olvidar, ni un simple perdón: el perdón es un acto privado entre el agresor y su víctima, y no puede haber perdón colectivo sin tener en cuenta a las víctimas.

En efecto, en las últimas décadas se han consolidado imperativos jurídicos internacionales que protegen a víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en la etapa previa a las transiciones y que buscan impedir que esos hechos vuelvan a suceder. Estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de lo ocurrido, en la obtención de una reparación por ese concepto y en la judicialización y responsabilización del culpable de los crímenes.

241 Rodríguez Montenegro, Gina Paola. Los límites del perdón. Notas sobre la justicia transicional en Sudáfrica, Centroamérica y Colombia. En: Justicia Juris, 2011, vol. 7, no. 2, p. 52-66.

Esto implicaría enjuiciar a los perpetradores que han cometido graves violaciones de los derechos humanos; enjuiciamiento que puede servir para evitar futuros crímenes, brindar consuelo a las víctimas, reflejar un nuevo conjunto de normas sociales, iniciar el proceso de reformar instituciones gubernamentales y promover la reconciliación.

La experiencia colombiana muestra los efectos perversos de esas transiciones amnésicas; las amnistías incondicionales al terminar los conflictos —sin haber establecido responsabilidades, ni esclarecido la verdad de lo ocurrido, ni reparado a las víctimas— mantuvieron sentimientos de injusticia y venganza que alimentaron guerras y violencias posteriores. El olvido no parece ser una base sólida para lograr la garantía de que esos hechos atroces no se repetirán.

El derecho internacional de los derechos humanos, desde su perspectiva universal, aporta varios puntos de análisis. Este derecho se describe en los primeros tres principios, en los cuales se establece el derecho inalienable del pueblo y de las víctimas de saber la verdad sobre hechos que entrañaron violación a los derechos humanos. En el segundo se describe que las víctimas directas e indirectas deben beneficiarse del derecho a la verdad.

La aplicación de este derecho se ha realizado en el sistema interamericano, pero no en el europeo, debido a que el tipo de problemas jurídicos planteados difiere en cada uno de los continentes. Es así como en América la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado la aplicación de este derecho en los casos de desaparición forzada de personas o de masacres contra la población civil en los cuales las víctimas exigen la verdad de la desaparición de sus familiares y la ubicación de los restos para darles un último adiós. Esto se verificó en casos como Castillo Páez contra Perú, Bamaca Velásquez contra Guatemala, 19 comerciantes contra Colombia²⁴², El Mozote contra El Salvador, Santo Domingo contra Colombia, entre otros, en los cuales se les exigió a los Estados, a título reparatorio, que se informara la verdad de lo ocurrido y se localizaran los restos de las víctimas para aliviar a sus familiares.

.....
242 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 19 Comerciantes c. Colombia, sentencia del 5 de julio de 2004, párr. 97; caso Santo Domingo c. Colombia, sentencia del 30 de noviembre de 2012, párr. 301 [en línea], [citado 2016-03-10]. Disponible en Internet: <<http://www.corteidh.org>>.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos²⁴³ indicó que las víctimas y sus familiares tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, por cuanto constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares, y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer.

Además, la justicia transicional debe ser entendida como la trató el filósofo y cientista social Jon Elster, para quien esta “se compone de los procesos de juicios, purgas y reparaciones que tienen lugar luego de la transición de un régimen político a otro”²⁴⁴. Sobre este punto, Iván Orozco Abad explica que las transiciones pueden ser de un régimen autoritario a uno democrático o de una situación de guerra a una de paz²⁴⁵.

La reparación, la memoria y el derecho a la verdad en el derecho interno y en el derecho internacional de los derechos humanos

Cuando hablamos de *reparación* según el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de brindar reparaciones a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reparación puede asumir diferentes formas, entre las cuales se encuentran la ayuda material, la asistencia psicológica y las medidas simbólicas.

En el análisis jurisprudencial realizado por la Corte Constitucional de Colombia (estudio realizado en sentencias emitidas desde 2010 hasta 2014) se reitera la obligación que tiene el Estado de respetar y garantizar el goce del ejercicio de los derechos humanos; de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de su territorio, y proteger, además de garantizar, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, se hace hincapié en la garantía de no repetición, al destacar las comisiones de la verdad, que permiten plantear un enfoque armónico necesario para construir la verdad y enfrentar varios de los múltiples problemas

243 Ley de justicia y paz transicional: un avance significativo Roberto Mora Sarasti International Law: Revista Colombiana de derecho Internacional, ISSN-e 1692-8156, N°. 6, 2005, págs. 119-157

244 Jon Elster. Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica. Buenos Aires: Katz, 2006. p. 15.

245 Iván Orozco Abad. Justicia Transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Temis y Universidad de los Andes, 2009.

surgidos en las sociedades posconflicto, e implementar medidas de satisfacción y no repetición.

A partir de lo establecido en la Ley 1448 de 2011²⁴⁶, en el entendido de la definición adoptada para el concepto de *víctima*, la Corte Constitucional establece que dicho concepto puede variar dependiendo del derecho interno de cada Estado, en la medida en que esta noción coincida o no con el derecho internacional de los derechos humanos. Esta noción es acogida por la Corte al definir *víctima* como “la persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó”²⁴⁷.

A partir de este concepto de víctima, desarrollado de manera interna e internacional, se pasa a observar los derechos que la cobijan, en un periodo histórico en el cual se agravan las violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos. Así, resultan como medidas de protección las señaladas en el párrafo 4.º del artículo 3.º de la Ley 1448 de 2011²⁴⁸, el cual se refiere al derecho a la verdad, a las medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición (verdad, justicia y reparación).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos²⁴⁹ ha reiterado la conexión entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En relación con este último, además, ha insistido en que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario o de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto al daño sufrido. La reparación se concreta por medio de la restitución íntegra o plena, pero también mediante la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción de alcance colectivo y la garantía de no repetición. Igualmente, la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales, y se concreta con medidas tanto

246 Colombia, Congreso de la República. Ley 1448 (10 de junio de 2011) Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial 48096 de 10 de junio de 2011.

247 Uprimny Yepes, Rodrigo. ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre verdad, justicia y reparación en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2005

248 Colombia, Congreso de la República. Ley 1448 (10 de junio de 2011). Op. cit.

249 Dorado Porras, Javier. Justicia transicional. En: Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, 2015, no. 8, p. 192-204.

individuales como colectivas, las cuales se encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado.

Por su parte, la Corte Constitucional²⁵⁰ señala como reconocimiento expreso la reparación del daño causado que le asiste a este determinado grupo de personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, en la medida en que esta reparación no solo adopte las características de una justicia distributiva, sino que sea también una justicia restaurativa. Entonces, incluye de manera preferente la restitución plena (*restitutio in integrum*); es decir, el restablecimiento de la víctima a su estado anterior al hecho de la violación.

La reparación integral incluye la restitución, la compensación y una serie de medidas como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición. De igual manera, en cuanto a la reparación, se hace referencia en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)²⁵¹ que los miembros de grupos armados al margen de la ley tienen la obligación y el deber de reparar a las víctimas por aquellas conductas punibles por las que fueron condenados mediante sentencia judicial. Se exige de antemano una reparación, sin necesidad de haber sido individualizado el sujeto activo: por el simple hecho de haberse probado el daño y el nexo causal con el grupo armado, la víctima identificada sería beneficiaria de dicha reparación.

En contextos en los cuales se ha producido un orden sistemático de violaciones a los derechos humanos, la memoria de los sobrevivientes adquiere una importancia radical. Enzo Traverso²⁵² plantea que, a partir de la Primera Guerra Mundial y de otros traumas históricos que fueron parte de la experiencia vivida en el siglo XX (genocidios, exterminio étnico, guerras o represiones políticas y militares), la memoria se convierte en una obsesión que cuestiona los procedimientos tradicionales de la historia, especialmente porque recupera la voz de los testigos de acontecimientos violentos, inhumanos y brutales.

En el caso específico de Colombia, existe una complejidad adicional, pues los procesos de memoria tienen ciertos efectos al tratarse de un contexto en el que la historia contemporánea nacional se encuentra anclada a la convivencia

250 Sobre los efectos antidemocráticos que ha tenido la falta de memoria en las guerras en Colombia, véase Sánchez, G. Guerras, memoria e historia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003.

251 Colombia, Congreso de la República. Ley 975 (25 de julio de 2005) Ley de justicia y paz. Bogotá: Diario Oficial no. 45980 de 25 de julio de 2005.

252 Traverso, Enzo. El pasado: instrucciones de uso. Madrid: Marcial Pons, 2007.

permanente y pasiva con múltiples violencias, sin que se hayan producido esfuerzos suficientes para desentrañar las causas; además, si se cuenta con esa memoria —no solo como dato sociológico, sino como un derecho libre de toda víctima o de los sobrevivientes— se producirá reivindicación, a diferencia de otras experiencias, como una exacerbación de las violencias.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad: [...] contribuye a la justicia y [...] tiene un contenido claramente reparativo en dos dimensiones: individual y colectiva, toda vez que, conforme a la primera, el derecho a la verdad surge del deber del Estado de esclarecer los hechos relacionados con las vulneraciones a los derechos humanos, y de acuerdo con la segunda, este derecho implica preservar la memoria colectiva del olvido, a fin de evitar que las violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro.²⁵³

Significa esto que la memoria recobrada, en relación con graves violaciones a los derechos humanos o vejámenes a la dignidad humana, tiene unos efectos totalmente reparadores en términos de justicia correctiva y de no repetición, sobre todo cuando se ha superado el contexto en el que han ocurrido estas violaciones; por lo tanto, supone la existencia de un momento histórico en el que la sociedad transita hacia la ausencia de disputas violentas y puede hacer frente a su pasado atroz.

Cuando la memoria empieza a ser parte de la justicia transicional, contribuye de manera excepcional al proceso de reparación, al realizar una construcción en palabras de los hechos sucedidos, la cual, de acuerdo con Traverso, estaría “filtrada por conocimientos adquiridos con posterioridad, por la reflexión que sigue al suceso, por otras experiencias que superponen a la originaria y modifican el recuerdo”²⁵⁴. De igual manera, Enzo Traverso se refiere a la emergencia de la memoria como escritura del pasado, una memoria viva encuadrada en una serie de marcos sociales que la sitúan en el tiempo.

Mediante la construcción de memoria, las huellas del pasado llegan al presente para hacer frente a sus peligros, contradicciones y urgencias. El pasado ha

253 Cepeda Rodríguez, Emerson Harvey. Corte Constitucional y conflicto armado: control de políticas sociales en el marco del conflicto en Colombia. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2012, vol. 42, no. 117, p. 425-453.

254 Traverso, E. El pasado: instrucciones de uso. Madrid: Marcial Pons, 2007. p. 22.

sido traído al presente para constituir el futuro y una forma de pensar en el futuro como promesa de porvenir. Mauricio Gaborit señala:

[...] cuando el sujeto no recuerda solamente para sí mismo, sino también quiere imprimir a la acción social un signo distinto que se origina en un pasado que, a su juicio, no debe desaparecer, la orientación temporal del proceso se orienta también hacia el futuro.²⁵⁵

La necesidad de preservar la memoria como parte de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas se ha integrado a Colombia por medio de las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011; sin embargo, es importante señalar que la Corte Constitucional colombiana, en diferentes decisiones judiciales sobre la constitucionalidad de las normas penales anteriores a las leyes mencionadas, destacó este derecho no solo como una prerrogativa exclusiva de las víctimas, sino también de la sociedad en conjunto. El papel de la memoria, entonces, se encuentra estrechamente relacionado con la justicia, en el entendido de que la memoria sirve para dismantelar los mecanismos que hicieron y siguen haciendo posible la barbarie, para luchar en contra de la impunidad y recuperar la noción de la verdad.

Frente al caso colombiano, no solo ha existido una primacía del idealismo frente al realismo, alejándonos de la posible transición, sino que se ha presentado una desafortunada orientación legal que ha llevado a pulverizar la realización de la justicia transicional sobre la base de una judicialización extrema y precaria, frente a un número excesivo de declaraciones que no permiten tener una adecuada aplicación de esta transición y, por ende, impiden la verdad judicial. Ante esto, la opinión pública siente que hay injusticia e impunidad por la ausencia de condenas, lo que conduce a que el aparato judicial, sin detenerse mucho en su función, proceda en muchos casos a considerar los relatos de las víctimas como pruebas únicas e intangibles dentro de los expedientes, o bien a crear unidades de análisis de contexto, cuando esas deben ser funciones de los académicos interesados en el tema.

Al hablar de memoria y reparación, es importante destacar el carácter reparador que tengan estas dentro de los contextos de violaciones de derechos humanos, como parte fundamental del derecho de los sobrevivientes a conocer la

255 Gaborit, Mauricio. Memoria histórica: relato desde las víctimas. En: Pensamiento Psicológico, 2006, vol. 2, no. 6, p. 7-20.

verdad sobre las causas por las cuales fueron víctimas. Este carácter puede permanecer en el tiempo por medio de símbolos, fiestas, emblemas, monumentos y conmemoraciones.

Conocer la verdad es un derecho después de conflictos armados o periodos represivos; las sociedades y los individuos tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones masivas de derechos humanos. Todas las culturas reconocen la importancia que tiene el correspondiente duelo para la cicatrización de las heridas personales y comunitarias.

El derecho internacional reconoce claramente el derecho de las víctimas y los supervivientes a saber en qué circunstancias se desarrollaron las violaciones graves de sus derechos humanos y quién las cometió. Además, el derecho internacional continúa desarrollándose en este sentido y también respecto al derecho de las sociedades a conocer la verdad.

El derecho internacional de los derechos humanos plantea los precedentes para cumplir con los estándares internacionales por medio de su jurisprudencia y la que se incorpora al ordenamiento interno mediante el llamado “bloque de constitucionalidad”, lo cual le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otros tribunales internacionales introducir su jurisprudencia, con el ánimo de que se apliquen esos derechos fundamentales en el ordenamiento interno.

En la iniciativa de la búsqueda por la verdad se conforman las llamadas *comisiones de la verdad*. En Colombia se ha llegado a la creación de un registro histórico que brinde a las víctimas información sobre los hechos sufridos (la suerte de los desaparecidos o la razón de que algunos grupos fueran blanco especial de represión).

En cuanto a las comisiones de la verdad, esta nueva manera de comprender la justicia se formalizó por medio de la adopción de los principios de Chicago de justicia transicional, en los cuales se explica que este tipo de justicia debe responder a criterios de flexibilidad, conforme con las reglas locales, respetando la discrecionalidad procesal del Estado.

Las investigaciones de las comisiones de la verdad siguen ciertos pasos, que van desde la protección de las pruebas, la formación de archivos, las entrevistas a víctimas y actores políticos fundamentales, la apertura y difusión de información pública, hasta la presentación de informes y recomendaciones.

La memoria en la justicia transicional

Al hablar de *memoria*, en el sentido más amplio, entendemos que es el recuerdo recobrado que nos lleva a armar un contexto de hechos sucedidos en un tiempo y un espacio determinados. La importancia de incluirla en el desarrollo de la justicia transicional radica en la posibilidad de reconstruir el camino hacia lo sucedido y el esclarecimiento de los hechos que llevaron a violaciones de derechos humanos en el conflicto armado.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo es reunir suficientes herramientas para confrontar en el presente un reconocimiento del pasado atroz vivido por las víctimas, que en muchos casos llega a ser parte de su identidad, de sus ideologías, de sus intereses, con el fin de evitar que estos hechos sean repetidos por los mismos o por diferentes actores.

Según lo expresa José María Ruiz-Vargas:

La memoria es un fenómeno biológico, cerebral, que adquiere dimensiones mentales o cognitivas en la medida en que nuestra conducta presente es influenciada por nuestras experiencias pasadas.

[...]

Nuestro cerebro es un órgano biológicamente preparado —desde su unidad funcional irreductible, la neurona, hasta los sistemas funcionales complejos— para almacenar información.

[...]

Gracias a esa propiedad para conservar huellas de todo lo que experimentamos, es decir, gracias a la memoria, el cerebro va creando una base de conocimiento cada vez más amplia y más compleja de dónde recuperar la respuesta más idónea a cada situación concreta (esta sería la función básica de la memoria).²⁵⁶

En otras palabras, gracias a la información almacenada en la memoria podemos responder de la manera más eficaz posible a las diferentes y continuas exigencias del mundo en el que vivimos. De esto se desprende, a su vez, que la memoria participa en cada una de las actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida.

256 Ruiz-Vargas, J. M. Memoria y olvido: Perspectivas, evolucionista, cognitiva y neurocognitiva. Madrid: Trotta, 2002.

De acuerdo con Jacques LeGoff, citado por José María Ruiz-Vargas:

La memoria es un fenómeno de una complejidad extraordinaria e intrigante, lo cual no ha sido nunca un freno, sino todo lo contrario, para que pensadores, científicos e intelectuales en general hayan reconocido su papel crucial para la vida del individuo y del grupo social, y, en consecuencia, hayan planteado la necesidad de comprenderla y explicarla. La historia del propio concepto de memoria atestigua en tal sentido una travesía larga, cambiante y difícil en la que abundaron los obstáculos, las críticas y las descalificaciones para su asentamiento, con épocas en las que incluso fue asociada al ocultismo y a la magia, hasta llegar a ser aceptada y reconocida como un elemento indispensable para el desarrollo individual y colectivo, gracias a la imparable “expansión de la memoria” —en palabras de Leroi-Gourhan— desde el Renacimiento y, de un modo definitivo, desde la Revolución francesa hasta nuestros días.²⁵⁷

Memoria y memoriales

Las víctimas de violaciones de los derechos humanos no pueden olvidar, y los Estados tienen el deber de preservar la memoria de esos crímenes. Eso se viene realizando por medio de los monumentos, los museos y los actos conmemorativos, que son iniciativas educativas indispensables para el establecimiento de un registro irrefutable y para evitar la repetición de los abusos. En muchos casos, al promover acciones conmemorativas, la sociedad civil ha servido de acicate para que los Estados asuman su responsabilidad.

Algunos ejemplos de conmemoración son los museos y los monumentos, que instruyen a la población sobre los abusos del pasado. Por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, dedicado a presentar la historia de la dictadura militar y documentar sus abusos. También hay espacios transformados para señalar escenarios de violaciones de los derechos humanos; por ejemplo, Constitution Hill, en Johannesburgo, una antigua prisión, ahora sede del Tribunal Constitucional sudafricano; al igual que actos de recuerdo, como las manifestaciones que se celebran cada 24 de marzo en Argentina para recordar el comienzo de la última dictadura militar. En el Perú, familiares de desaparecidos han unido sus fuerzas para tejer una larguísima “chalina de la esperanza” en memoria de las víctimas.

.....
257 Ibid.

Paul Ricoeur ha abordado el problema del exceso de memoria poniendo de presente la dificultad que existe en deslindarla del análisis y de la contrastación. Para el citado autor, privilegiar en exceso la memoria:

[...] es sumergirse en el oleaje indomable del tiempo. El estatuto de la memoria en una historia es inseparable de la reflexión sobre el binomio pasado/presente, que es propio de una sección distinta, ya que la oposición señalada por este binomio no es neutral, sino que expresa un sistema de valoración, como en los binomios antiguo/moderno, progreso/reacción.²⁵⁸

La dificultad radica en el momento de hacer las verificaciones de las comisiones de la verdad, para poder establecer con las narraciones de las víctimas un contexto amplio que lleve a verificar los hechos sucedidos, y no como hasta el momento ha venido sucediendo, con una verdad a medias y sin esclarecer infinidad de violaciones de los derechos humanos. Esta exigencia, en principio, debería hacerse de forma radical a los grupos armados al margen de la ley, en el preciso momento en que dichos postulados confieran de igual manera esa memoria de los hechos sucedidos, para poder confrontarlos con la memoria de las víctimas y lograr una verdadera reparación.

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo expuesto en esta contribución académica, se analiza la relación entre el marco de la justicia transicional y lo que conlleva en su esencia: la propia reparación a las víctimas del conflicto armado; reparación que a la luz de los derechos humanos es entendida no solo en el ámbito material y pecuniario, sino también en el social y de manera globalizada, de forma que alcance y cubra otros aspectos que han sido vulnerados a las víctimas, los cuales no pueden ser desconocidos por los autores del conflicto armado ni por el Estado, atendiendo al principio de corresponsabilidad.

Así mismo, se ha mostrado el papel del proceso de justicia transicional en la memoria de las víctimas; entendiendo una memoria que trae historia intrínseca, ya sea completa o incompleta, de los hechos sucedidos a través del tiempo en un territorio específico, sobre violaciones cometidas a la sociedad.

.....
258 Ricoeur, Paul. La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Arrecife, 1999. p. 499

El camino hacia y para la paz está lleno de dificultades y controversias, y esto lleva a pensar en el olvido, en la impunidad, en la amnistía y en otras figuras necesarias para llegar a materializar la paz por medio de una justicia transicional. Por ello, la propuesta es darles la importancia necesaria a las víctimas, no solo al brindarles la atención que merecen, sino al facilitarles el camino para evitar las dificultades que puedan encontrar al momento de adquirir sus derechos como víctimas, sin importar el grupo étnico, social o económico al que pertenezcan, siempre y cuando haya una verificación eficaz por parte de los entes del Estado, para no incurrir en errores repetitivos (Ley 975 de 2005, Justicia y Paz). Estos errores, en su mayoría, han sido y siguen siendo subsanados, tal como lo mencionan las diferentes sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana desde el 2010.